



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Sala Plena de Decisión

Magistrada Ponente: Dra. Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020)

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Medio de control	Control inmediato de legalidad del Decreto No. 0154 de 14 de abril del año 2020, expedido por el alcalde del Municipio de San Antero, Córdoba
Radicación	23.001.23.33.000-2020-00189-00

I. ASUNTO

Procede la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba a proferir sentencia de única instancia dentro del control inmediato de legalidad del Decreto No. 0154 de 14 de abril del año 2020, expedido por el alcalde del Municipio de San Antero, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 136 y 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. ANTECEDENTES

2.1 ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE CONTROL

El Decreto No. 0154 de 14 de abril de 2020¹ *“Por medio del cual se declara la calamidad pública por la pandemia del COVID-19, en el municipio de San Antero, Córdoba”*, expedido por el alcalde del Municipio de San Antero – Córdoba².

A través del citado acto administrativo se adoptan las siguientes decisiones: **i)** Declara la Calamidad Pública en el municipio de San Antero, Córdoba, en virtud de la pandemia a causa del COVID-19; **ii)** Ordena que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San Antero elabore un plan de acción específico de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de acuerdo con los criterios establecidos en la ley 1523 de 2012; **iii)** Ordena que el secretario de planeación municipal este a cargo de las labores a desarrollar en el marco de la calamidad pública y siguiendo lo establecido en el plan específico de acción; **iv)** Ordena que se destinen los recursos que sean necesarios para solucionar la situación de calamidad pública en el municipio de San Antero **v)** Ordena que la actividad contractual se lleve de acuerdo con lo establecido en el capítulo VII régimen especial para situaciones de desastres y calamidad pública de la ley 1523 de 2012; **vi)** Establece que el decreto tendrá una vigencia de 3 meses a partir de su publicación con posibilidad de prorrogarse por tres (3) meses más, de acuerdo a previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio **vii)** Ordena remitir copia del presente decreto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Contraloría Departamental y **viii)** Establece que el decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

¹ Ver en expediente digital documento PDF “2. DEMANDA 2020-189”

² Ver en expediente digital documento en PDF “1. Acta de Reparto 2020-189”

Como fundamento del acto administrativo objeto de estudio el alcalde municipal citó la declaración como pandemia realizada el 11 de marzo del corriente por la Organización Mundial de la Salud -OMS-; el artículo 2, 209 y 315 numeral 2 de la Constitución Política; los artículos 14, 55, 57, 58, 59 y 64 de la ley 1523 de 2012; la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; el Decreto 417 de marzo de 2020, emanado del presidente de la república y la recomendación emitida por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de San Antero mediante acta 008 de 14 de abril de 2020.

III. TRAMITE PROCESAL

3.1 ADMISIÓN

El medio de control fue admitido por auto fechado 20 de abril del año 2020³, ordenándose la notificación al señor alcalde del municipio de San Antero, para que si lo consideraba oportuno interviniera dentro trámite surtido; se ordenó la notificación al señor agente del Ministerio Público. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 185 del CPACA, se ordenó la fijación de un aviso sobre la existencia del proceso para que cualquier ciudadano pudiera intervenir.

Se solicitó a la alcaldía de San Antero rindiera un informe detallado sobre los antecedentes administrativos del Decreto No. 0154 de 14 de abril de 2020.

3.2 INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

La alcaldía del municipio de San Antero sostuvo que el acto administrativo se dictó acogiendo las normas que están en la parte considerativa del Decreto municipal 154 de abril de 2020. Señala que la declaratoria de calamidad pública en el municipio es parte de una estrategia para hacer uso de los recursos necesarios para responder a los problemas que presente el COVID-19 en el municipio de San Antero.

3.3 CONCEPTO DE MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador 33 Judicial II para Asuntos Administrativos⁴ conceptuó que debe declararse la improcedencia del control inmediato de legalidad sobre el Decreto No. 0154 de 14 de abril de 2020.

Sostiene que de conformidad con el artículo 136 del CPACA, la naturaleza del control inmediato de legalidad es frente aquellos actos de carácter general que son expedidos en desarrollo de los decretos ley, por el gobierno nacional en el marco de la declaratoria de los estados de excepción, así mismo señala que el hecho de que un acto administrativo sea expedido o se refiera en su motivación a los estados de excepción sin ser necesario, no quiere decir estos sean objeto de control por parte del artículo 136 de la ley 1437 de 2011, adicionalmente afirma que este medio control es de carácter excepcionalísimo, por tanto es ajeno a las atribuciones ordinarias de las autoridades.

En concreto señala que las disposiciones que se utilizaron para sustentar del decreto municipal 154 de 2020, son competencias ordinarias de los alcaldes municipales, como por

³ Ver en expediente digital documento PDF "3. AUTO ADMITE 2020-189"

⁴ Ver en expediente digital documento PDF "6.1 Concepto Ministerio Público 2020-189"

ejemplo las que están contenidas en la ley 1523 de 2012, así mismo el decreto municipal tiene una serie de disposiciones que no son ordenes sino enunciados institucionales, accesorios a las medidas establecidos y que por lo tanto deben correr la misma suerte.

3.4 INTERVENCIÓN DE PARTICULARES

Dentro del trámite procesal no se presentaron intervenciones.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 COMPETENCIA

Según lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 151 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a los Tribunales Administrativos del lugar donde se expidan «*conocer en única instancia, del control inmediato de legalidad de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados por autoridades territoriales departamentales y municipales*⁵».

A efectos de desatar el asunto corresponde al Tribunal estudiar lo siguiente: i) Estados de excepción y generalidades del control inmediato de legalidad, ii) Presupuestos de procedibilidad del control inmediato de legalidad y iii) Conclusiones.

4.2. ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y CONTROL INMEDIADO DE LEGALIDAD

La Constitución Política de 1991 faculta al presidente de la república para que con la firma de todos los ministros pueda declarar de forma reglada, excepcional y limitada, tres tipos de **estados de excepción** a saber: i) guerra exterior, ii) conmoción interior y iii) emergencia económica, social y ecológica⁶; en este último evento, la declaratoria responde a situaciones fácticas que amenacen o perturben gravemente el orden económico, social y ecológico o constituyan grave calamidad pública, que en todo caso deben ser distintas a las que provocan los estados de excepción por «*guerra exterior o por conmoción interior*».

En vigencia de los estados de excepción, el Gobierno Nacional se encuentra facultado para proferir los «*decretos legislativos*»⁷ que considere necesarios para superar la situación que

⁵ El artículo 20 de la Ley 137 de 1994 “Ley Estatutaria de los Estados de Excepción”, dispone: “Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un **control inmediato de legalidad**, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.”

De igual forma, el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 regula el control inmediato de legalidad.

⁶ Artículo 212, 213 y 215 de la Constitución Política de Colombia, y artículos 46 a 50 de la Ley 137 de 1994.

⁷ Según el artículo 215 de la Constitución: «... Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el **Estado de Emergencia**, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare el **Estado de Emergencia**, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. (...)

El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

originó dicho estado, los cuales pueden suspender incluso las leyes que resulten incompatibles.

Por su parte, el control inmediato de legalidad⁸ se realiza por la jurisdicción contencioso administrativa respecto actuaciones administrativas –*acto administrativo, circular, disposición, medida, etc.*- de carácter general dictadas en ejercicio de función administrativa (*potestad reglamentaria*) que constituyan el **desarrollo de los Decretos Legislativos** expedidos durante los Estados de Excepción. Y el examen de legalidad se efectúa «*mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994) y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción*»⁹.

Este control se concibe como una limitación al poder de las autoridades administrativas emisoras de actos administrativos durante los estados de excepción, y una medida eficaz para impedir la aplicación de normas ilegales en el marco de dichos estados de excepción. Por último, vale recordar que el presidente de la república puede expedir diferentes tipos de decretos, así:

i) **Decretos reglamentarios:** Se expiden por el ejecutivo nacional como suprema autoridad administrativa en ejercicio de la potestad reglamentaria¹⁰ consagrada en el artículo 189 numeral 11¹¹ de la Constitución Política¹². La norma citada consagra una cláusula

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

(...)

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

PARAGRAFO. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliera con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento».

⁸ El Consejo de Estado identifica como elementos característicos del control inmediato de legalidad los siguientes: a) Que se realiza dentro de un verdadero **proceso judicial**, pues lo adelanta una autoridad jurisdiccional como lo ordena el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, y se decide mediante sentencia judicial; b) Es **inmediato o automático**, c) El ejercicio jurisdiccional del control no suspende la ejecución del acto administrativo; d) La falta de publicación no impide que el acto administrativo sea pasible del control; e) Es **integral** frente a las directrices constitucionales y legales y a los decretos legislativos que le atañen; f) Es **compatible** con el ejercicio de los medios de control de nulidad simple y nulidad por inconstitucionalidad; g) Es un control **participativo** porque los ciudadanos pueden intervenir sentando su posición sobre la legalidad del acto administrativo objeto de control; y por último h) La sentencia que decide el control inmediato de legalidad hace tránsito a **cosa juzgada relativa** en tanto abarca el bloque normativo que sirve de contexto y el fundamento del acto administrativo general de que se trate.

⁹ Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, decisión de 5 de marzo de 2012, Rad, 11001-03-15-000-2010-00369-00 (CA).

¹⁰ **La potestad reglamentaria** es la facultad constitucional atribuida de manera **permanente** a algunas **autoridades** para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida **ejecución de la ley**, mediante las cuales se desarrollan las reglas y principios en ella fijados.

Su propósito es señalar aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten la debida aplicación de la ley, sin que en ningún caso pueden modificarla, ampliarla o restringirla en cuanto a su contenido material o alcance.

¹¹ **Constitución Política “Artículo 189.** Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (...) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

¹² La Corte Constitucional en **Sentencia C-066 de 1999** expresa:

“La potestad reglamentaria para el efectivo cumplimiento de la ley corresponde al Presidente de la República, quien habrá de ejercerla mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes que resulten necesarios

general de competencia reglamentaria de la ley, es decir, que se puede ejercer sobre todas las leyes, mediante decretos, órdenes y resoluciones.

ii) **Decretos con fuerza de ley o decretos extraordinarios**¹³: Son aquellos proferidos con fundamento en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política de Colombia ¹⁴. De esta manera, el Congreso de la República otorga facultades *pro tempore* al ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley, cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. En esta categoría se puede encuadrar también el decreto que expide el Gobierno para poner en vigencia el Plan Nacional de Inversiones Públicas cuando el Congreso no lo aprueba en el término consignado en el artículo 341¹⁵ superior.

iii) **Decretos legislativos**: Son los que expide el presidente de la república tanto para declarar el estado de excepción previsto en los artículos 212 a 215 de la Carta, como para desarrollar dicho estado, en virtud de las atribuciones legislativas de que queda revestido en forma excepcional por la declaratoria¹⁶.

De ahí que, con la expedición de los decretos legislativos¹⁷ se abre la competencia para que, desde el orden nacional, departamental y municipal en ejercicio de *funciones administrativas*, se profieran actos administrativos de carácter general que implementen o desarrollen dichos decretos los cuales serán pasibles del control inmediato de legalidad.

4.3. PROCEDENCIA DEL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD

Precisado lo anterior, es necesario recordar los presupuestos que determinan la procedencia del control inmediato de legalidad según la jurisprudencia. En ese sentido, se

para ello, lo que indica que no puede tal atribución que a él le asigna la Constitución desplazarse a uno de los ministerios, ni a ninguno otro de los organismos del Estado, pues esa potestad se atribuye al Presidente como suprema autoridad administrativa quien, desde luego, al ejercitarla habrá de expedir los decretos necesarios con la firma del Ministro del ramo respectivo. (...) se reitera ella corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Nacional, quien la conserva durante todo el tiempo de vigencia de la ley sobre la cual pueda recaer el reglamento para su cumplida ejecución, lo que significa que el legislador no puede someterla a ningún plazo, como lo hizo en el párrafo que aquí se analiza."

¹³ Definidos por el Consejo de Estado en la sentencia de fecha 30 de julio de 2013, Radicado número: 11001-03-24-000-2005-00170-01 así: "Los decretos con fuerza de ley son aquellos expedidos por el Gobierno con base en la posibilidad que tiene el Congreso, conforme al artículo 150-10 Superior, para revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. (...) Igualmente, son decretos con fuerza de ley, según lo previsto en el artículo 341 de la Constitución Política, aquellos mediante los cuales el Gobierno pone en vigencia el Plan Nacional de Inversiones Públicas, si el Congreso no lo aprueba en un término de tres meses después de presentado.

¹⁴ **Constitución Política "Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (...) 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. (...)"**

¹⁵ **Constitución Política "Artículo 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. (...) Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley."**

¹⁶ Ver sentencia Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de mayo de 2020, de radicación número: 11001-03-15-000-2020-01763-00(Ca)A, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López.

¹⁷ En sentencia C-802 de 2002, la Corte Constitucional refiriéndose al estado de conmoción interior, precisó lo siguiente: "(...) la Constitución ha establecido dos tipos de decretos legislativos: Los **declarativos** del estado de conmoción, con fuerza de ley porque constituyen una auto habilitación para legislar y los **decretos de desarrollo** de esas facultades excepcionales".

requiere que la determinación adoptada verse sobre: a) actos administrativos de contenido general, b) deben ser dictados en ejercicio de la función administrativa, y c) con el fin de desarrollar uno o más decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción.

4.4. CONCLUSIONES

En este caso se procederá a realizar el análisis sobre el cumplimiento de los presupuestos antes mencionados con relación al Decreto No. 0154 del 14 de abril del año 2020, expedido por el alcalde del municipio de San Antero, Córdoba, de la siguiente manera:

i) El Decreto No. 0154 de 14 de abril de 2020 *“Por medio del cual se declara la calamidad pública por la pandemia del COVID-19, en el municipio de San Antero, Córdoba”*, expedido por el alcalde del municipio de San Antero, constituye un *“acto administrativo de contenido general”*¹⁸, en tanto crea una situación jurídica objetiva, abstracta e impersonal. De tal manera que, dicho acto no se relaciona directamente con personas determinadas o determinables.

ii) Respecto del segundo presupuesto (ser dictado por una autoridad administrativa) se tiene que el acto bajo examen fue expedido por el alcalde municipal de San Antero¹⁹, en ejercicio de la **función administrativa**²⁰, por lo cual este presupuesto también se cumple.

iii) En torno a que el decreto municipal desarrolle o implemente **decretos legislativos**, la Sala advierte que este presupuesto no se cumple, como se procede a explicar:

El Decreto No. 0154 del 14 de abril del año 2020, fue expedido por la autoridad municipal con el propósito de decretar la situación de calamidad pública en el Municipio de San Antero, ordenar al Comité Municipal de Gestión del Riesgo la elaboración y aprobación de un Plan de Acción Específico y dar aplicación a lo dispuesto en el capítulo VII de la ley 1523 de 2012.

En ese sentido, el alcalde desarrolló en el municipio de San Antero las facultades establecidas en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política, artículos 1, 3, 12, 14, 57, 58, 59 y capítulo VI de la Ley de 1523 de 2012 *“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”*; tuvo en cuenta la declaración como pandemia realizada el 11 de marzo del corriente por la Organización Mundial de la Salud; la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social; el Decreto 417 de marzo

¹⁸ La Corte Constitucional en Sentencia **C-620/04** define los actos administrativos generales como aquellos actos administrativos en los que los supuestos normativos aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por lo tanto versados a una pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas aquellas que se encuentren comprendidas en tales parámetros.

¹⁹ **Artículo 315** de la Constitución Política de Colombia: Son atribuciones del alcalde:(...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes.”

²⁰ Entendiendo la **función administrativa** como la actividad continua y permanente mediante la cual se ejecuta la ley para satisfacer las necesidades estatales consagradas en términos generales en el artículo 2 constitucional.

Vale recordar que según el **artículo 2** de la **Constitución Política**, son fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

de 2020 emanado del presidente de la república y la recomendación emitida por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de San Antero mediante acta 008 de 14 de abril de 2020.

De tal manera que el acto administrativo bajo estudio no tiene como fin desarrollar o implementar ningún decreto legislativo expedido por el presidente de la república con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia económica social y ecológica dispuesta a través del Decreto 417 del 17 de marzo del 2020.

El Consejo de Estado ha concluido que los decretos, resoluciones y directivas del Gobierno Nacional respecto de las medidas sanitarias para contener la Covid-19 y que han ordenado y prorrogado el aislamiento preventivo obligatorio, **no son decretos legislativos**, en tanto fueron expedidos con fundamento en las facultades ordinarias del presidente de la república²¹.

Igualmente, la alta Corporación ha precisado que “... cuando el artículo 136 del CPACA se refiere a actos generales que desarrollen decretos legislativos, debe entenderse por estos últimos a los decretos con fuerza de ley que expide el Gobierno Nacional al amparo del decreto que declara el estado de excepción, sin que en ellos se encuentre comprendido el mismo **“decreto legislativo”** que hace dicha **declaratoria**, pues su desarrollo inmediato no se produce a través de actos administrativos generales. En efecto, de acuerdo con el esquema constitucional atrás referido, los actos que **desarrollan** la emergencia económica, social, y ecológica, declarada con fundamento en el artículo 215 de la C.P., son los decretos legislativos, cuya finalidad exclusiva es “conjurar la crisis” e “impedir la extensión de sus efectos” y que se deben referir “a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia”²².

Por otra parte, el Consejo de Estado explica que “los actos que desarrollan las medidas de carácter legislativo excepcional (contenidas en **decretos legislativos**), dictadas al amparo de la declaratoria del estado de excepción, son actos expedidos en ejercicio de función administrativa. Su propósito es reglamentar estos decretos legislativos, y sobre ellos recae el control inmediato de legalidad, el cual resulta pertinente en razón a que fueron dictados, no como expresión de una facultad administrativa ordinaria de reglamentación de leyes del Congreso de la República, sino para desarrollar actos dictados al amparo de una facultad legislativa excepcional ejercida por el Presidente de la República y desarrollada por una autoridad nacional”²³.

Corolario, advertido que el Decreto No. 0154 del 14 de abril del año 2020, objeto de análisis, no invoca como fundamento del mismo ningún decreto legislativo expedido por el Gobierno Nacional, se colige que este no es susceptible de examen a través del control inmediato de legalidad asignado a esta jurisdicción.

Finalmente, se resalta que lo decidido en esta providencia no comporta el carácter de cosa juzgada pues el acto administrativo en cuestión es pasible de control judicial ante esta

²¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N 19, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez, Radicación 11001-03-15-000-2020-01958-00.

²² Ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, auto del 22 de mayo de 2020, Radicación Número: 11001-03-15-000-2020-01955-00(Ca).

²³ Ver proveído del 11 de mayo de 2020, Radicación número: 11001-03-15-000-2020-01763-00(CA)A, Referencia: Resolución 1290 de 20 de abril de 2020, “por la cual se da aplicación a lo establecido en el artículo 6° del Decreto 491 de 2020”.

jurisdicción, en aplicación de lo estatuido en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba**, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar la improcedencia del control inmediato de legalidad sobre el Decreto No. 0154 de 14 de abril de 2020 *“Por medio del cual se declara la calamidad pública por la pandemia del COVID-19, en el municipio de San Antero, Córdoba”*, expedido por el alcalde del municipio de San Antero, por los motivos expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: La presente decisión no hace tránsito a cosa juzgada, lo que significa que contra el Decreto No. 0154 del 14 de abril del año 2020, proceden los medios de control previstos en la ley.

TERCERO: Por Secretaría, realizar las notificaciones de rigor al alcalde del municipio de San Antero y al señor agente del Ministerio Público, y comunicar esta decisión en el link “control automático de legalidad” habilitado por el Consejo Superior de la Judicatura en la página web de la Rama Judicial.

CUARTO: Cumplido el término de ejecutoria, ARCHIVAR el expediente sin necesidad de nuevo auto que lo ordene.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


NADIA PATRICIA BENÍTEZ VEGA
Magistrada


DIVA MARÍA CABRALES SOLANO
Magistrada


LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Magistrado


PEDRO OLIVELLA SOLANO
Magistrado